



La democracia hoy: el jardín de los senderos que se bifurcan

Alain Rouquié

Alain Rouquié es presidente de la Casa de América Latina en París, Director de investigación emérito de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas, Presidente de la Casa de América latina.

Conferencia dictada por el Dr. Alain Rouquié en el acto en el que se le otorgó el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario, en el marco del *VII Congreso Nacional sobre Democracia “Los desafíos del siglo XXI en América Latina. Democracia, desarrollo e integración”*. Organizado por el Centro de Estudiantes y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, Rosario, 31 de Octubre de 2006

Este título de inspiración borgeana no tiene otro objetivo que subrayar el carácter laberíntico de la problemática de la democracia hoy día en América latina. Pero antes de abordar este tema en su dimensión regional, creo necesario hacer dos comentarios sobre las tendencias globales que configuran el telón de fondo de nuestras reflexiones sobre las experiencias democráticas en este continente.

1º) Desde la caída del comunismo y el fin de la “guerra fría” los principios de la democracia representativa aparecen como la única fuente de legitimidad política, al menos, en el mundo occidental. Si bien el colapso del totalitarismo soviético no ha significado “el fin de la historia” tan prematuramente anunciado, es cierto que no existe hoy en día ningún otro modelo de sociedad, como polo alternativo, frente a la “democracia de mercado”, lo que, en un mundo que ha dejado de ser bipolar, contribuye fuertemente a orientar los comportamientos de los actores sociales.

2º) Desde la desaparición de la URSS la defensa de la democracia ha sido el mayor factor de legitimación de la acción exterior de los Estados Unidos. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la única superpotencia, al declarar la “guerra total al terrorismo”, ha lanzado una “cruzada democrática” mundial. Esta diplomacia armada consiste en imponer por la fuerza a ciertos países los “beneficios de la libertad”, es decir el régimen representativo pluralista.



Triunfo e incertidumbre de la democracia

Entre noviembre de 2005 y diciembre de 2006, doce países de la región han tenido elecciones presidenciales. Estas coincidencias electorales incluyen todos los grandes países de la zona, a excepción de la Argentina. Esta ola electoral, sin precedente, da cuenta de la vitalidad democrática del continente.

- 1º) Todos los gobiernos de América continental son hoy constitucionales y representativos.
- 2º) Nunca desde la Segunda Guerra Mundial hubo entre el Río Bravo y Tierra del Fuego, tantos gobiernos con legitimidad electoral y nunca durante un período de tiempo tan largo.

Se puede discutir sobre la consolidación de la democracia, construir modelos teóricos ingeniosos para ilustrar los diferentes procesos de transición a la democracia, pero más empíricamente, algunos casos específicos, ilustran suficientemente la tendencia dominante.

Lo que llama la atención del observador, ante todo, es que en algunos países sin previa experiencia democrática, la democracia no ha sido restaurada sino *instaurada*. Es el caso de todos los estados centro-americanos con la excepción de Costa Rica, democrática desde 1948 sin interrupción. El Salvador es un ejemplo significativo. Después de los acuerdos de paz de 1992, la extrema polarización político-social que llevó el país a la guerra civil ha sido sustituida por una inesperada distensión y una coexistencia pacífica entre los dirigentes de la extrema derecha y los de la guerrilla. ARENA ocupa el gobierno nacional y el FMLN administra las intendencias municipales de las principales ciudades del país.

Si de duración se trata, Brasil y Argentina ilustran el cambio de época. Brasil, en el año electoral de 2006 conmemora 21 años de democracia después de 21 años de régimen militar (1964-1985). Además, podemos recordar que en 2003, por primera vez en 43 años, un Presidente electo transmitía la banda presidencial a otro jefe de Estado ungido por el sufragio universal. La Argentina cumplirá en 2007, año de renovación de sus autoridades, 24 años de continuidad representativa. Esta situación no tiene precedente histórico en un país que ha padecido más de medio siglo de hegemonía militar y de inestabilidad política a partir de 1930.



¿A qué se debe esta evolución virtuosa?, ¿qué cambios de comportamiento han contribuido a plasmarla? Podemos destacar, tomando en cuenta el trasfondo geopolítico a que aludíamos en la introducción, dos componentes cruciales. Por un lado la conversión de los revolucionarios a la democracia llamada por ellos “formal” o “burguesa” y por el otro la aceptación por parte de los medios conservadores de los resultados electorales, aun cuando vayan en contra de sus preferencias.

No es necesario insistir sobre el primer punto. Son numerosos los ex-guerrilleros que se han integrado al sistema representativo después del final de las dictaduras y del colapso del comunismo. Hasta se podría decir que es hoy un rasgo definitorio de la vida política de muchos países como sucede en América Central, donde muchos militantes tomaron las armas para derribar el autoritarismo y no para instaurar el socialismo. Es también un componente importante del personal político brasileño, en el Partido de los Trabajadores (PT) en particular. En Uruguay, en la coalición del Frente Amplio que gobierna el país desde 2005, uno de los partidos más fuerte procede del movimiento de guerrilla urbana Tupamaros.

En cuanto a la derecha, nunca buena perdedora, vemos que aceptó la alternancia y la derrota de sus candidatos sin tratar de subvertir el orden constitucional en varios casos recientes. Es así como la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, en 2002, la de Tabaré Vázquez en 2004 en Uruguay, o la de Evo Morales en 2006 en Bolivia, no desencadenaron ninguna crisis desestabilizadora, a semejanza de lo que pasó en Chile en 1970, cuando la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones. En Brasil es preciso recordar que cuando Lula fue por primera vez candidato presidencial en 1989, el portavoz de la Federación de Industrias de São Paulo, amenazó con cerrar miles de empresas si el PT llegaba a la Presidencia. En 2002, la estrategia anti-PT fue más sutil y menos directa. Los “mercados financieros” trataron de asfixiar al país a medida que las encuestas acercaban a Lula al poder. Tan es así que los electores se pronunciaron finalmente en contra de esta presión financiera y llevaron a la Presidencia al candidato que “amenazaba la economía”.

Lo que quería recordar es que hace 20 años y a veces mucho menos, los vencidos del sufragio universal solían llamar a la puerta de los cuarteles para “corregir” los resultados de las



elecciones. Ahora no. Además, ya que hablamos de militares podemos observar que los militares golpistas más recientes, como los de Venezuela en 1992, o de Ecuador en 2000, se han convertido también a los procedimientos electorales y han competido para ser elegidos a la cabeza de sus respectivos Estados .

Claro podrán objetar que se trata del pasado y que éste nos dice poco sobre el presente y la práctica electoral en este año excepcional de 2006. Creo sin embargo que debíamos empezar por subrayar esta vitalidad de la democracia en el continente. No para considerar que la consolidación democrática es un hecho consumado sino para recordar que la democracia es, para decirlo en términos de Montesquieu, esencialmente un “aprendizaje de la virtud”¹, largo y complejo.

Efectivamente la tentación anti-democrática no desaparece del todo. Hasta se nutre de la ilusión democrática, es decir de las expectativas excesivas nacidas del derrumbe del autoritarismo. Conocemos los bajos índices de popularidad del régimen democrático en varios países del continente. También recordamos la gran encuesta del PNUD, publicada en 2004² que arroja cifras poco alentadoras acerca de la preferencia relativa de los electores por la democracia.

Si bien es cierto que la encuestas de opinión necesitan interpretarse en su contexto, algunos acontecimientos incontrastables parecen acreditar este malestar democrático. Es el caso de las renuncias forzadas de Presidentes constitucionales antes del final de sus mandatos. Estos derrocamientos, verdaderos “golpes civiles” han sido generalmente provocados por estallidos sociales o por olas de protesta de gran envergadura. Han ocurrido en varios países. Una vez en Argentina en diciembre 2001, dos veces en Bolivia en 2003 y 2005, y tres veces en Ecuador. Pero cabe señalar que en estos tres países de diversa tradición política y de estructura social diferente se encontró una salida institucional a la crisis sin la intervención espuria de ningún salvador de la patria -individual o colectivo- y sin alterar el orden democrático, ni las garantías constitucionales.

¹ Ver Alain Rouquié, “El desafío de la democracia o el aprendizaje de la virtud”, en A. Rouquié (ed.), *Cómo renacen las democracias?*, Buenos Aires, Emecé, 1985.

² Según esta encuesta efectuada en 18 países, el 54,7% de los latino-americanos aceptarían un gobierno autoritario si resolviera sus problemas económicos, PNUD, *La Democracia en América Latina*, 2004, p.137.



Más aún, podemos decir sin tergiversar los hechos que estas renunciaciones presidenciales expresan de forma paradójica cierto afianzamiento de la cultura y de los valores democráticos, lo que implica que un Presidente constitucional no puede mantenerse en el poder por la fuerza. El nivel de tolerancia a la violencia estatal difiere según los países pero las renunciaciones bajo la presión de la calle reflejan un nuevo respeto del ciudadano y la vigencia de los derechos humanos, fundamento del sistema democrático. En verdad, la democracia es ante todo una cultura, un código de conducta y de autocontrol de gobernantes y gobernados y no sólo un método para cambiar las autoridades políticas. Bajo este aspecto existen hoy día en América Latina peculiaridades que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de evaluar el perfil político de los Estados y las tendencias dominantes de las evoluciones en curso.

Democracias post-autoritarias y precariedad institucional

Esta democracia que intentamos enfocar en sus dos facetas, vitalidad por un lado, incertidumbre por el otro, ha merecido de parte de los sociólogos y comentaristas varios calificativos. Se ha hablado de una democracia de *baja calidad* “porque no ha traído progreso a la región”, de una democracia *incompleta, inacabada, defectuosa...* No vamos a añadir un adjetivo más sino tratar de señalar algunas de las posibles fuentes de esta singularidad política.

Muy a menudo los estudiosos de las transiciones democráticas se han limitado a considerar las condiciones económicas, sociales y políticas del cambio de régimen. Algunos han insistido también sobre las lógicas estratégicas de los actores de ambos lados de la línea divisoria entre los partidarios del autoritarismo y los de la democracia. A mi modo de ver se ha dejado escapar así muchas veces una dimensión esencial. Puesto que si bien es cierto –como señala Hugo Quiroga– que “las dictaduras han legitimado el principio democrático”, no debemos olvidar que las “nuevas repúblicas” son “hijas de las dictaduras”, y a veces sus prisioneras.

Efectivamente no se pasa de la dictadura a la democracia como de la noche al día, o de la oscuridad a la luz. Una democracia “sucesora” por muy consolidada que parezca (con elecciones transparentes, alternancia en el poder, superación institucionalizada de las crisis)



sigue siendo post-autoritaria. No nace en un vacío histórico sin herencia, ni huella de los regímenes anteriores. No hablamos sólo de los condicionamientos “pactados” entre los responsables de la dictadura en retirada y las fuerzas democráticas sino de una impronta más amplia, profunda y duradera que cubre a veces todos los sectores de la vida nacional. Por supuesto que es un tema que necesita investigaciones empíricas cuidadosas y un enfoque multidisciplinario. Pero desde ya podemos proponer algunos ejemplos conocidos o más discretos de esas herencias autoritarias.

Chile, quizás sea el caso más patente. En este país desde hace 16 años el régimen democrático funciona en el marco de la Constitución dictada durante la dictadura del general Pinochet. Por otra parte el modelo económico implementado sigue siendo en lo esencial el de los militares. Los “amarres de la democracia” o los “enclaves autoritarios” (autonomía de las Fuerzas Armadas, senadores designados, limitación de las competencias presidenciales en el campo de la defensa y de la seguridad, en particular) han quedado vigentes hasta casi el final de la presidencia del socialista Ricardo Lagos (2000-2005). Todavía la ley electoral que polariza los escrutinios y favorece a la derecha, no ha sido reformada.

Los militares chilenos tenían como objetivo instalar una “democracia tutelada”, protegida y limitada. Por lo tanto, como señala Carlos Huneeus, ha sido sumamente difícil dismantelar “el andamiaje autoritario” y el proceso de emancipación democrática aún no ha terminado. Tan es así que los partidos democráticos siguen gobernando juntos en una coalición formada por socialistas y demócratas cristianos para derrotar a la dictadura en el plebiscito de 1988. Casi veinte años después, los partidos de la “Concertación” no han recobrado su identidad individual y el frente democrático aún se mantiene. Además la izquierda, hasta la victoria de Ricardo Lagos, tenía que enfrentar una imagen de fracaso y de caos impuesta por la dictadura y sus partidarios. La visión de los vencedores del 11 de septiembre de 1973 sigue dominando la cultura dominante a pesar de que la derecha ha empezado a aceptar la verdad histórica.

En la Argentina, la sombra de Proceso de 1976 dista mucho de haber desaparecido después de la restauración democrática. No sólo porque la cultura pretoriana de medio siglo ha sobrevivido al restablecimiento del orden representativo en 1983 y se ha mantenido por lo menos hasta mediados de los 90. El dismantelamiento del Estado emprendido a partir del



golpe de 1976 y la concentración sin precedentes del poder económico han quitado a los gobiernos democráticos muchas de las competencias y de los recursos públicos necesarios para enfrentar situaciones críticas heredadas (fuga de capitales, deuda externa, inflación...). También la política económica y financiera del Proceso ha dejado huellas en el comportamiento de los operadores y de los ciudadanos. Así es como la nostalgia de la “plata dulce”, llave del “primer mundo” de la época de Martínez de Hoz, otorgó legitimidad en un marco democrático a la ficticia “convertibilidad” del Dr Cavallo. Por otra parte, la inédita ferocidad represiva de la última dictadura y su “guerra sucia” ha suscitado una “ilusión democrática” peligrosa y contraproducente. No es cierto que la democracia sirva para todo. En fin, la pauperización social consecuencia de las políticas económicas seguidas después de 1976, no han favorecido actitudes cívicas constructivas. Las reacciones anti-políticas tanto como los retrocesos prebendarios o clientelistas padecidos por la Argentina democrática han sido condicionados en gran parte por los años de plomo de la dictadura.

No vamos a multiplicar los ejemplos, pero dos países ilustran la complejidad de las herencias autoritarias, me refiero a México y Brasil. México después de 70 años de una “dictadura perfecta” -según la fórmula del escritor Mario Vargas Llosa- del Partido-Estado, el PRI, (Partido Revolucionario Institucional), perdió el poder en 2000. En 2006 es sólo el tercer partido del país en importancia electoral. Pero el “impasse” provocado por el resultado de las elecciones de julio de 2006 muestra que la “cultura PRI” no ha desaparecido. El casi empate (0,60% de diferencia entre los candidatos del PAN y del PRD, Calderón y López Obrador) es menos importante que el comportamiento de los actores durante la campaña y frente a los resultados. Las sospechas son recíprocas; el PRD acusa al PAN victorioso de rechazar la alternancia democrática, presentando al candidato de la oposición como un “peligro para el país”, y el PAN denuncia la no aceptación de los resultados electorales por el candidato “peredista” como una manifestación de desprecio de las instituciones. Es evidente que la cultura autoritaria del ex-partido dominante, con su práctica consuetudinaria del fraude sigue siendo la lente a través de la cual los mexicanos ven todavía (y por mucho tiempo) las contiendas políticas nacionales.

En Brasil la herencia de una larga dictadura militar o como se suele decir cortésmente, del “régimen autoritario”, es más indirecta y más difícil de comprobar a primera vista. De hecho,



a partir de 1985, fecha del retorno de los civiles al poder, se han abandonado progresivamente las instituciones del régimen anterior. Una nueva Constitución fue promulgada en 1988 y también una nueva ley electoral. Lo que llama la atención es que los constituyentes han elaborado un proyecto que es el reflejo invertido del régimen dictatorial. Existe por consiguiente una simetría con la dictadura en esa inversión constitucional. Ésta era centralista y se dan muchos poderes a las entidades federadas (Estado o municipio); controlaba férreamente la justicia, la nueva Ley fundamental da al poder judicial una independencia sin control externo con la que Montesquieu nunca había soñado; los militares habían impuesto un bipartidismo coercitivo, las nuevas leyes favorecen la fragmentación política (hubo hasta 24 partidos en el Congreso), la debilidad partidaria, y el “transfuguismo” político. Esto explica en buena parte, “el presidencialismo de coalición” sin el cual no se puede gobernar³, y la corrupción política crónica y también puede anunciar cierto peligro para la gobernabilidad en el futuro.

Pero la herencia autoritaria no es el único problema institucional que afecta hoy a las democracias latinoamericanas. La erosión y a veces la decadencia del sistema de partidos políticos aparece en varios países sin pasado autoritario reciente. Primero con la crisis o el colapso de los partidos fundadores de la propia democracia, como en Venezuela luego de cuarenta años de bipartidismo estable, pero también en Bolivia o Ecuador. Sin llegar a estos extremos vemos la derrota de los partidos tradicionales, “patrias subjetivas” portadores de identidad cívica, frente al surgimiento de nuevos líderes como Uribe en Colombia o de una nueva fuerza política como la del Frente Amplio en Uruguay.

El caso argentino ilustra, como siempre, “la anormalidad obstinada” de este país. La casi desaparición del radicalismo en las elecciones de 2003 hace que el gobierno no tenga una verdadera oposición. Pero tampoco existe un partido “oficialista” propiamente dicho: el justicialismo es hoy día una nebulosa de muchos colores. El presidente es peronista sin serlo, “transversal” sin atreverse a crear un verdadero movimiento político de centro izquierda a partir de una heterogénea máquina electoral. Tampoco los desprendimientos del radicalismo

³ El partido del Presidente tiene menos de la quinta parte de los diputados en la Cámara baja del Congreso (el PT tiene 83 diputados sobre 513).



han logrado erigirse en fuerzas políticas de peso y la política se vuelve cada vez más territorial.

Por otra parte se da en algunos países un fenómeno que puede considerarse novedoso: la aparición de movimientos políticos improvisados, efímeros, a veces hasta fugaces alrededor de *outsiders* de la vida política nacional. En el Perú, Ollanta Humala, candidato desconocido y sin partido logra en seis meses juntar casi el 48% de los votos. En Ecuador, Rafael Correa, crea de la nada un partido (Alianzapais) que lo lleva a una sorprendente victoria. En Bolivia, el MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales es una alianza de sindicatos que se cuida de parecerse a un partido político. En Venezuela, en 2006, el movimiento chavista (MVR) dista mucho -después de siete años de presidencia- de ser un verdadero partido capaz de sustituir a las desacreditadas fuerzas políticas tradicionales.

¿Cómo explicar esta volatilidad de los partidos? ¿Estamos en un momento de renovación y de recomposición frente a una nueva realidad? Pero ¿por qué el fin de la guerra fría y tal vez de las ideologías significarían la desaparición de los partidos? ¿Por qué en la época de las NTIC y de los *blogs*, de la multiplicación de las encuestas de opinión y del individualismo consumista podríamos prescindir de los partidos? No tengo respuesta a esta pregunta clave para el futuro de la democracia sino con otra cuestión: ¿por dónde y cómo se van a operar la “agregación de las demandas” y la participación ciudadana sin partidos?

Alternancia y exigencia de ciudadanía

Desde 2005 y el comienzo de la serie de elecciones presidenciales que termina en diciembre de 2006 se han verificado importantes cambios políticos: alternancias en el poder con cambios de rumbo. De ahí se sacó -un tanto apresuradamente- la conclusión de que soplaban nuevos vientos en el continente y hasta que la región entera giraba a la izquierda. Esta percepción donde se juntan alarmismo conservador y sensacionalismo periodístico merece dos comentarios.



Primero, si bien hubo alternancias, hubo también continuidad y reelecciones. Y no todas del lado de la izquierda como lo ilustran la reelección de Uribe en Colombia, la elección de otro presidente del PAN en México, o la vuelta al poder de dos ex-presidentes centristas de los años ochenta, Oscar Arias en Costa Rica, y Alan García en Perú. Entre las reelecciones más significativas podemos señalar el segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la reelección de Hugo Chávez en Venezuela y también el triunfo de la Concertación en Chile con una candidata del mismo partido socialista que su predecesor.

En cuanto a la izquierda o mejor dicho a las izquierdas, las etiquetas ocultan a veces las realidades. Si miramos de cerca vemos que si algunos presidentes pertenecen sin lugar a duda a la “izquierda” (Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet, por ejemplo), hay pocos gobiernos de izquierda. Los presidentes “progresistas” gobiernan en coaliciones con partidos de centro o de derecha hasta en Uruguay, donde la democracia cristiana participa en el gobierno.

Pero estos membretes son lo de menos. Lo importante son las tendencias dominantes obrando por debajo de resultados accidentales cambiantes. Si tomamos las elecciones presidenciales del siglo XXI, o a partir de los últimos años del siglo anterior, se destacan dos grandes temas, dos preocupaciones esenciales de los electorados: la creación de empleos y la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Las principales alternancias corresponden a la traducción electoral de estas exigencias. Así es como Lula da Silva en Brasil llega al Planalto en 2003 con un programa de empleos y de lucha “contra el hambre”, a la vez simbólica y concreta. Tabaré Vázquez en Uruguay y Hugo Chávez en Venezuela ostentan programas parecidos y objetivos semejantes. En Chile, Michelle Bachelet, en un contexto diferente de coalición democrática, ha hecho hincapié en la disminución de la pobreza ya reducida a la mitad durante el mandato de su predecesor, el presidente Lagos.

Es interesante señalar que en algunos países en que no hubo alternancia, los candidatos que representaban estos mismos objetivos de lucha contra la exclusión y de políticas sociales



dirigidas a los menos favorecidos, han tenido un notable éxito electoral. Tomemos sólo dos ejemplos: México y Perú.

En México, el candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática), López Obrador, ex-intendente de la Ciudad de México, estuvo tan cerca de ganar que no aceptó los resultados apretados que daban la victoria a su adversario del PAN. Ahora bien ¿cuál era el programa del candidato del PRD? “Primero los pobres” (empleo, aumento del salario mínimo, medidas de asistencia social). El PRD obtiene sus mejores resultados en el sur del país, indígena y poco industrializado.

En el Perú, los resultados de la segunda vuelta fueron bastante apretados también, Ollanta Humala recibió el 47,3% de los sufragios contra 52,7% para el ex-presidente “aprista” Alan García. Pero el primero gana en el Sur indígena y la Sierra. Tiene enorme ventaja en los 15 departamentos mas pobres (83,9% en Ayacucho, 73% en el Cuzco, casi el 80% en Huancavelica). El voto “humalista” fue un mensaje fuerte para los nuevos gobernantes, recordándoles que tienen que “compensar desigualdades y desequilibrios”, luchar contra la exclusión y para el desarrollo de las regiones mas desfavorecidas.

De hecho, lo que está en juego en estas elecciones es nada menos que la exigencia de ampliación de la ciudadanía. A lo largo de la historia, América latina tuvo “elecciones sin democracia” y luego “democracia sin ciudadanos”, hoy día el “déficit de ciudadanía” es el gran desafío. La democracia, llamada a veces de “baja intensidad”, basada en el clientelismo y las relaciones verticales, es un sistema de tipo censitario en el que los “ciudadanos pasivos” están manipulados y recompensados. La formula, “un hombre un voto”, principio de base del sistema representativo pluralista, tiene dificultad para implantarse en un contexto de fuerte desigualdad. Tocqueville consideraba que la democracia era, ante todo, un “estado social” caracterizado por la “igualdad de condiciones”. Y agregaba: “el bienestar general favorece la estabilidad de todos los gobiernos, pero especialmente del gobierno democrático”⁴. Pero no se podía tal vez prever en su época que la practica de la democracia “sin condiciones”, y sin igualdad durante decenios, por muy controlada y restringida que fuese, podía generar una

⁴ Alexis de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*, París, Robert Laffont, 1986, Primera parte, Capitulo III y Segunda parte, capitulo IX, págs. 75 y 266 (la traducción es nuestra).



exigencia de ciudadanía concreta, es decir en términos tocquvillianos, una irrefutable “pasión por la igualdad”.

Hoy la exigencia de ampliación de la ciudadanía es el hecho más significativo de una revolución polaca, no siempre visible, que adopta modalidades diferentes según las sociedades. En Bolivia ha sido de lo más espectacular: un indígena aymará, sindicalista agrícola (*cocalero*) ganó las elecciones con una votación casi sin precedentes en el país (54%) y ha movilizó el apoyo de los indígenas, mayoritarios y marginados por siglos. Estos sectores sociales pobres han empezado a organizarse en oposición a las reformas liberales y modernizadoras que afectaban su vida cotidiana y por las que no habían sido consultados. Asistimos -a principios del nuevo siglo- a sublevaciones de usuarios de los servicios públicos en vías de privatización o ya privatizados (como el agua en El Alto y Cochabamba). La imposición de las leyes de mercado en servicios básicos, consecuencia de la retirada del Estado, agrava la exclusión de los más pobres que además pertenecen a grupos étnicos discriminados. Las rebeliones sectoriales y la “fractura étnica” coinciden y provocan una movilización “soberanista” en defensa de los recursos mineros todavía existentes, es decir, el gas y el petróleo. Podemos recordar que la renuncia del Presidente Sánchez de Losada en octubre de 2003 se debió a una revuelta de indígenas urbanizados en defensa del gas natural y en contra de las modalidades de su exportación.

En Brasil, nación de reciente industrialización, la llegada a la Presidencia de un obrero, sindicalista, hijo de campesinos pobres del Nordeste y migrante interno, ha sido percibida como una especie de emancipación simbólica de las clases populares. Millones de brasileños en 2002 y en 2006 se consideraron representados, reconocidos. Lo que explica la popularidad persistente del Presidente Lula, a pesar del desgaste de cuatro años de mandato en los que no faltaron ni las esperanzas incumplidas, ni las medidas impopulares, ni los escándalos.

Ahora bien, detrás de estos dos ejemplos existe una extraordinaria novedad. Se trata de una transformación de los comportamientos que por supuesto no se limita a los dos países: el voto intercambiado ha sido sustituido por el voto representativo es decir, ciudadano. Por eso los dirigentes se parecen cada vez más a la mayoría de los ciudadanos. En Brasil, como en Bolivia, dos sociedades profundamente diferentes, el “semejante vota por el semejante”. El



pobre o el indígena no buscan necesariamente -a través del voto- el apoyo del rico, del notable, del Doctor... Los de abajo ya no deben dar su voto a los de arriba. El trabajador, el pobre, también es ciudadano y puede ser dirigente de cualquier nivel, lo que es una sorpresa y una novedad. En su primer intento electoral para la gobernación del estado de São Paulo, Lula da Silva en 1982, ocupó la cuarta posición, y según las encuestas, los electores más desheredados se negaban a votar por un hombre del pueblo, como ellos.

A la luz de estas reflexiones podemos intentar comprender algo de las singularidades de Venezuela hoy. Podemos considerar que el régimen de Presidente Chávez, más allá del “boom petrolero” y de la idiosincrasia de su líder, se inscribe en la misma perspectiva. La demanda de integración social es la base de la movilización de las clases populares venezolanas y de su determinado apoyo al Presidente. Por un lado, las capas sociales marginadas se benefician de programas sociales bien calibrados que los convencen de que, con este régimen, la bonanza petrolera no está reservado a las elites y a los privilegiados, lo que fue - por lo menos- el caso en los noventa. Por otra parte estos mismos beneficiarios se reconocen en un jefe del Estado que no es ni blanco, ni miembro de la elites pudientes. La fuerte polarización política interna es tan intensa porque coincide con una fractura social y étnica. Pero, sobre todo en el caso de Venezuela, las políticas de ajuste y de retracción del Estado en un país con enorme riqueza mineral, han provocado a partir de 1989 estallidos sociales e intentos golpistas. Finalmente la demanda social insatisfecha va a desbordar el marco del sistema democrático establecido en 1958. Esta situación no es un caso aislado, aunque es el más espectacular.

Los “varios porvenires “ de la democracia.

Es conocido de sobra que las “transiciones “ a la democracia de los años ochenta han sido duramente afectadas por la crisis de la deuda, que tal vez las ha acelerado. Luego, las reformas estructurales de corte liberal destinadas a superar esta crisis tuvieron un impacto negativo duradero sobre el empleo, la igualdad, la inversión social. La media década perdida (1998-2002) de crecimiento estancado, con una caída fuerte del PBI per capita agravó más aún el nivel de desempleo y de pobreza. Por eso los “gobiernos de alternancia” de principios



de siglo tienen en común dos objetivos independientemente de su estilo político que son la integración social y la lucha contra la pobreza por un lado, la rehabilitación del Estado y de la política por el otro.

En cuanto a la rehabilitación del Estado, es la consecuencia normal del fracaso de los tratamientos de choque pro-mercado y de la ideología que consideraba que el Estado era el problema y no un instrumento necesario para encontrar una solución. Ya se sabe que en el contexto de hoy, sólo la autoridad pública puede contribuir a sanear las situaciones sociales más inaceptables. Además la globalización impone mantener firmemente el dominio de herramientas económicas adaptadas para responder a la volatilidad de los mercados y de los flujos financieros. La necesaria reforma del Estado no significa su debilitamiento, menos aún su desmantelamiento. Así la privatización de servicios públicos implica crear agencias regulatorias públicas eficaces y exigentes. Un Estado competente desarrollando políticas sociales dirigidas a los más necesitados (y no destinadas a las clases medias como ocurrió tradicionalmente) no es el Estado hipertrofiado e insaciable, el “ogro filantrópico” de la caricatura de Octavio Paz.

Ya se sabe en América latina que las economías no funcionan con “piloto automático”. Por eso los nuevos gobiernos “sociales” han intentado colocar la política, es decir el Estado, en el centro de la vida nacional. Y todos estos gobiernos de alternancia comparten -de una forma o de otra- esta característica que tiene como corolario estratégico cierta tendencia a la afirmación nacional y a veces al nacionalismo. La reconstrucción del Estado implica, de hecho, la defensa de la soberanía económica que puede tomar aspectos muy diferentes y responder a expectativas históricas y colectivas de diversa índole. Bajo formas distintas, esta dimensión ideológica está presente tanto en Venezuela y Bolivia como en la Argentina de Kirchner o el Brasil de Lula. Además no se expresa sólo con medidas económicas, puede manifestarse también a través de una política exterior activa y ambiciosa (como en los casos de Brasil y Venezuela).

Pero es ahí donde en este laberíntico jardín de la democracia los senderos se bifurcan. Es cierto que muchos comentaristas, norteamericanos sobre todo, han afirmado que existen dos visiones, dos tipos diferentes de “democracias sociales”. Dejemos de lado las clasificaciones



en términos de buenos y malos, o de pragmáticos y “populistas”: la mera utilización de este último término, concepto de pacotilla, polémico y vacío, quita toda seriedad al análisis. En realidad encontramos por un lado, es cierto, líderes y gobernantes que proceden del movimiento obrero en sus distintas facetas. Como decía Lula da Silva en 2003, al tomar posesión de la presidencia, no son “simple producto de una elección sino de una historia”. La cultura partidaria estructura su acción, orienta sus prácticas. Estos dirigentes “socialistas o social-demócratas” quieren edificar gradualmente una sociedad más incluyente y más justa. Por eso son “posibilistas”. Tratan de conciliar el crecimiento económico, la estabilidad política, con un programa de progreso social. Tienen una visión de mediano y largo plazo de sus países y gobiernan en el marco de las instituciones existentes. Lula, Lagos y Bachelet tanto como Tabaré Vázquez corresponden a este perfil.

Por el otro lado, tenemos líderes que se caracterizan por ser *outsiders*. Surgen de forma inesperada, en circunstancias excepcionales de crisis o de colapso de los partidos democráticos, lo que incluye -a veces- a la izquierda tradicional. Crean o improvisan un partido *ad hoc* para las elecciones; se proclaman a veces socialistas sin tener vinculación alguna con la tradición socialista o obrera y pretenden ante todo cambiar fundamentalmente el sistema político y “refundarlo”. Por eso, al llegar al poder convocan una constituyente para modificar las reglas de juego. Pero su ideología es -ante todo- nacionalista y estatizante. Su legitimidad electoral es de tipo plebiscitaria: privilegian una relación directa con el pueblo más allá de los partidos, a veces contra los partidos. Hugo Chávez, y su “revolución bolivariana” sería hoy día el modelo, Evo Morales en Bolivia, o Rafael Correa en Ecuador tienen alguna semejanza con este esquema que hubiera seguido Ollanta Humala en el Perú, de haber ganado las elecciones.

Estos movimientos “antipolíticos” de refundación no dejan de ser ambiguos. Tal vez ilustren, como lo señalaba Raymond Aron “la disociación de los valores políticos y de los valores sociales” de la izquierda en ciertas sociedades⁵. Si sus políticas sociales, su prédica nacionalista, su voluntad de fortalecer el Estado favorecen el sentimiento de pertenencia y la constitución de la ciudadanía, estamos quizás ante un modelo integrador de transición social.

⁵ Raymond Aron, *L'opium des intellectuels*, Paris, Gallimard, 1968, p.36



Estas democracias plebiscitarias pueden ser una etapa de “alta intensidad” nacida en un período de buena coyuntura económica, a semejanza de los regímenes nacional-populares que aparecieron con la prosperidad de la última posguerra.

Pero, como se sabe, y como lo muestran los precedentes, las bonanzas son precarias y las “democracias plebiscitarias” también. ¿Cuál es su porvenir? Plantear esta pregunta es como tratar de saber a dónde va América latina hoy. Nada está escrito. Por ejemplo los guerrilleros del 70 y del 80 se integraron en el sistema político representativo, y respetan sus instituciones en casi todos los países, pero en Colombia se han convertido en narcoguerrilleros mafiosos. Lo mismo podría pasar con estas democracias “diferentes”; pueden abrir el camino a democracias representativas estables y consensuales una vez conseguida una mejor cohesión social en la etapa de hoy, pero también pueden transformarse en “democracias hegemónicas” o autoritarias o en alguna forma de “autoritarismo competitivo”, aunque esta última hipótesis nos parece poco probable en vista del contexto internacional. En la América de la posguerra fría, la interdependencia comercial y económica y los procesos de integración regional están lejos de facilitar una experiencia de “cesarismo democrático”.

Pero existe otra bifurcación, otra manifestación de dualismo. Ésta aparece al interior de los países. Una división geográfica con bases sociales opone, a grandes rasgos, las regiones integradas, modernas y dinámicas y las zonas deprimidas, pobres, a veces olvidadas. Esta fractura tiene hoy día una expresión electoral muy clara en varios países. Es generadora de tensiones sociales graves que pueden afectar la gobernabilidad. Señalo esta división electoral porque en muchos casos, por razones obvias que tienen que ver con la libertad del sufragio y la ciudadanía, es nueva o por lo menos nunca había aparecido de forma tan brutal y espectacular, sobre todo en algunos de los grandes Estados del continente.

En México ya vimos como, en el Centro y el Sur, los Estados federados más pobres han votado a favor del candidato del PRD. El Norte que se ha beneficiado de la integración comercial con Estados Unidos y del TLC ha apoyado mayoritariamente el PAN. En el Perú, el Sur y la Sierra indígenas han dado una victoria aplastante a Ollanta Humala, mientras Alan García ganó las elecciones en Lima, en las zonas mineras y en el “sólido Norte” de las plantaciones exportadoras. En Brasil también se dio el mismo fenómeno. Vimos como el



Presidente Lula tuvo excelentes resultados para su reelección en el Norte y el Nordeste poco desarrollados aún donde están la mayoría de los beneficiarios de sus programas sociales. En el Sur y Centro-Sur industrial donde nació el Partido de los Trabajadores, los electores dieron la preferencia, en la primera vuelta, en particular, a su adversario.

Estas oposiciones geográficas, sociales y a veces étnicas necesitan investigaciones pormenorizadas y serias para entender su significado y sus causas. Lo que sí es cierto y lo que demuestran, es que América Latina se encuentra políticamente en una encrucijada, entre la ampliación de la ciudadanía y el debilitamiento de los sistemas institucionales frente al peso de una demanda social acumulada y muy a menudo insatisfecha. Sin embargo, los optimistas podrán concluir, y lo haré en este sentido, que las elecciones sirven hoy día en el continente no sólo para cambiar a los dirigentes, sino también para señalarles los grandes desafíos que los esperan y que tendrán que superar. Y esto es sin lugar a duda un inmenso progreso en la construcción de la democracia.